



Fortalecer la cultura de las denuncias

Autor:

Julio Corcuera Portugal

Investigador de la sección seguridad y anticorrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú

22-10-2018

“No podemos hacer reforma cuando el tema de la extorsión no existe y hay mala data”, señala el experto Julio Corcuera.

En los últimos años la delincuencia en nuestro país ha adquirido niveles alarmantes bajo la modalidad de extorsión, al punto que los peruanos nos sentimos inseguros ante la falta de una política de prevención y lucha decidida frente a este álgido tema. Para el investigador de la sección seguridad y anticorrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio Corcuera Portugal, el problema es más complejo de lo que se piensa, pues no está considerado aún en la agenda nacional y no se puede hablar de reformas cuando no hay cifras reales sobre esta modalidad delincencial.

Lo que sí resulta preocupante, según Corcuera Portugal, es el crecimiento de las víctimas de extorsiones en el Perú, las mismas que no denuncian por el factor miedo. No hay que olvidar que la seguridad en un determinado territorio, distrito o región del país, contribuye al desarrollo, y que donde no hay seguridad las posibilidades de desarrollo son mínimas; por lo tanto, el desarrollo es la otra cara de la seguridad. “En ese sentido, desde las ciudades, suele asumirse la extorsión como un fenómeno vinculado a las grandes empresas, y es cierto, muchas de ellas son víctimas de organizaciones criminales como antes lo fueron de movimientos terroristas, con una modalidad muy parecida”; sin embargo, asegura que este delito ha empezado a ingresar a empresas medianas y, en algunos lugares, hasta en unidades económicas mínimas, por ejemplo: “la señora que vende emoliente, el señor que expende periódicos o el negocio ilegal vinculado a los pasajeros que suben al tren eléctrico, de manera informal”.

Precisamente, para el experto, este fenómeno ha hecho metástasis, pues el mercado extorsivo se ha tecnificado, evolucionado y perfeccionado, permanentemente, afectando seriamente la estabilidad del país.

EN CADA CONTEXTO

“No hay que olvidar que el Perú no es Lima, ni Miraflores, ni San Isidro, ni Magdalena o San Miguel; si uno va al interior del país, como a Zarumilla,

Leonardo Ortiz –algunas zonas de Trujillo–, Barranca o Ica, va encontrar este tipo de fenómeno: cuando alguien construye, recibe de inmediato una carta con una bala al interior”, señala.

Del mismo modo, resalta que, en algunas zonas de Lima como Independencia y San Juan de Lurigancho, se está cobrando cupos a los mototaxis; parte de las formas delictivas que están ingresando de manera porosa en todos los espacios de la ciudadanía. No es el gran tema de convivencia social, pero golpea las unidades básicas del sistema y merece ser atendida.

El experto añade que la constitución de políticas públicas suele hablar mucho de la evidencia. Cuando uno mira la evidencia y ve, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de los Programas Presupuestales (ENAPRES), se observa que Huancavelica ocupa el primer lugar en el mapa del delito, le sigue la ciudad de Lima y, en el último lugar, Lambayeque; esas cifras son oficiales y vale la pena cuestionarlas seriamente, ya que se debe tener en cuenta que estas modalidades de investigación son muestrales y no censales. Lo cierto es que la investigación cuantitativa tiene que ir relacionada con la variable cualitativa al recorrer el campo con un buen registro de datos, especialmente en los mercados extorsivos que hay en Huaral, Trujillo o Callao; sin ir muy lejos –refiere–, el boom exportador es un mercado interesante para las bandas extorsivas, entre otras.

VISIÓN REALISTA

La caída de importantes organizaciones delictivas como los “Ángeles Negros” o los “Caga Leche”, no significa que la extorsión desaparecerá; lo que se necesita son políticas públicas con indicadores a nivel cuantitativo y cualitativo, para un adecuado diseño de estrategias en la lucha contra esta modalidad de delito, enfatiza Corcuera.

“Cuando hablamos de seguridad ciudadana, los políticos en campaña no abordan el tema porque la data actual es invisible. Hay algunos que proponen, por citar un ejemplo, sacar a los militares a la calle; propuesta que no comparto y que no está de acuerdo a nuestra realidad. No podemos olvidar que la amenaza llega a través de la vía telefónica, mayoritariamente desde los penales”, enfatiza, no sin antes advertir que, si no hay un trabajo de campo serio y con cifras reales, no podemos hablar de políticas públicas al respecto.

Julio Corcuera tiene una vasta experiencia en el tema de seguridad ciudadana que incluye su paso por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la jefatura del Observatorio Peruano de Drogas, en DEVIDA, además de su participación como expositor en la Comisión Mundial de Prevención del Crimen y Justicia Penal (Viena), y como director de Políticas de Seguridad, en el Ministerio del Interior. Hoy, como docente de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, e investigador

del área de Seguridad y Anticorrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú, continúa aportando con su aguda visión de la realidad nacional que lo convierte en un referente en el tema de la seguridad ciudadana.